



Bogotá, D.C., diez (10) de agosto de dos mil veintiuno (2021)

REFERENCIA:

EXPEDIENTE No.: 11001-33-35-010-2021-00210-00

ACCIONANTE: EDILBERTO BORREGO JIMÉNEZ

ACCIONADO: AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA

CLASE: ACCIÓN DE TUTELA

I. ANTECEDENTES

1. LA ACCIÓN

En ejercicio de la acción de tutela contemplada en el artículo 86 de la Constitución Política, concurre el señor **EDILBERTO BORREGO JIMÉNEZ** con cédula de ciudadanía **1.784.525**, quien actúa a través de apoderada, y solicita la protección para su derecho fundamental de petición, que en su opinión ha sido vulnerado por la **AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA**.

1.1. PRETENSIONES

Tiene por objeto la presente acción que se acceda favorablemente a las siguientes pretensiones:

“Prevía la valoración de las pruebas que aportaré, solicito respetuosamente al señor Juez, se me tutele el derecho fundamental de petición, y en consecuencia se ordene lo que reglamentariamente corresponda.

- *Se declare que la AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA “ANM”, ha vulnerado el derecho fundamental de petición y en consecuencia se ordene la tutela del derecho fundamental de petición.*
- *A raíz de la anterior solicitud, solicito se ordene a la AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA “ANM”, para que dentro del término de cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación del fallo de tutela, se dé respuesta de fondo conforme lo establece la normatividad y la jurisprudencia de Colombia.*
- *Así mismo se sirva ordenar a fin de evitar un perjuicio irremediable, a la AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA “ANM”, para que de manera inmediata se sirva decretar la ejecutoria de la RESOLUCIÓN NÚMERO VCT-001828 del 24 de diciembre de 2020 del expediente GH4-15461X y la inscripción de la cesión en el Registro Minero Nacional, puesto que se encuentran cumplidas las exigencias formales previamente exigidas para el caso en mención”.*

1.2. HECHOS

Indica el accionante, haber elevado una petición vía correo electrónico el día 18 de mayo de 2021, ante la Agencia Nacional de Minería – ANM, solicitando la ejecutoria



de la Resolución No. VCT-001828 del 24 de diciembre de 2020, en el cual se hace referencia a que se acepta la cesión total de derechos y obligaciones, presentada por el señor Edilberto Borrego Jiménez, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.784.525, en su calidad de titular minero del contrato de cesión GH4-15461X, a favor de la sociedad COMERCIALIZADORA EL CONVENIO SAS con radicado No. 20205501010492 del 31 de enero de 2020 y reiterada con el radicado No. 20205501012222 del 03 de febrero de 2020; pero que no obstante, a la fecha no ha recibido respuesta alguna al respecto.

1.3. FUNDAMENTOS DE DERECHO

Sustenta la acción de tutela en los artículos 23 y 86 de la Constitución Política; en los Decretos Nos. 2591 de 1991, 306 de 1992, 1382 de 2000, y 2150 de 1995, este último en su artículo 1º; en la Ley 1755 de 2015; y en las sentencias T-219 del 4 de mayo de 1994, T-332 del 1º de junio de 2015, entre otras, proferidas por la Corte Constitucional.

Señala que en reiterada jurisprudencia se ha sostenido que la respuesta a un derecho de petición debe cumplir con los siguientes requisitos: i) debe ser oportuna, ii) debe resolverse de fondo, clara, precisa y de manera congruente con lo solicitado, y iii) ser puesta en conocimiento del peticionario; que, de no cumplirse con lo anterior, se incurre en una vulneración del derecho constitucional fundamental de petición.

2. TRÁMITE

Admitida la demanda por auto de **28 de julio de 2021**, se ordenó notificar al Representante Legal de la **AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA**, habiéndose surtido tal diligencia el mismo día como es debido.

3. CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

3.1. AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA

A pesar de haber sido notificada de la acción de tutela en legal forma, la Agencia Nacional de Minería guardó silencio, por lo tanto, se dará aplicación a lo previsto en el artículo 20 del Decreto 2591 de 1991.

II. CONSIDERACIONES

1. ASPECTOS GENERALES SOBRE LA ACCIÓN DE TUTELA

Tal y como lo prevén el artículo 86 de la Constitución Política y el Decreto 2591 de 1991, el mecanismo de la acción de tutela fue instituido para que toda persona por sí misma o por interpuesta persona, reclame ante los jueces la protección inmediata de sus derechos fundamentales, cuando resulten amenazados o vulnerados por la acción o la omisión de cualquier autoridad pública o de un particular en los casos



expresamente señalados; caracterizándola dos elementos esenciales: a) La subsidiaridad por cuanto sólo resulta procedente cuando el afectado no dispone de otro medio de defensa judicial, y, b) La inmediatez, puesto que a través de un procedimiento preferente y sumario debe propender por la guarda de la efectividad concreta y actual del derecho violado y amenazado.

Sobre la procedencia de la acción de tutela, la Corte Constitucional¹ ha señalado dos aspectos distintos.

En primer lugar, que **como mecanismo principal** de amparo de los derechos fundamentales procede cuando no exista otro medio judicial de defensa; o cuando existiendo, éste no resulta idóneo en el caso concreto.

En segundo lugar, que cuando exista un medio judicial ordinario idóneo, la tutela procede **como mecanismo transitorio**, siempre y cuando se demuestre que ésta es necesaria para evitar un perjuicio irremediable. Igualmente, señaló que el perjuicio se caracteriza: (i) por ser inminente, es decir, que se trate de una amenaza que está por suceder prontamente; (ii) por ser grave, esto es, que el daño o menoscabo material o moral en el haber jurídico de la persona sea de gran intensidad; (iii) porque las medidas que se requieren para conjurar el perjuicio irremediable sean urgentes; y (iv) porque la acción de tutela sea impostergable a fin de garantizar que sea adecuada para restablecer el orden social justo en toda su integridad. Adicionalmente, sostuvo que no existe la obligación de iniciar el proceso ordinario antes de acudir a la acción de tutela, siendo suficiente que dicha posibilidad esté abierta al interponer la demanda de tutela, puesto que, si el accionante ha dejado vencer la oportunidad para iniciar el trámite del proceso ordinario, la tutela no procede como mecanismo transitorio.

Existiendo otros medios de defensa, su procedencia queda sujeta al cumplimiento del **requisito de subsidiariedad**, por lo tanto, el Juez debe analizar la existencia de un perjuicio irremediable, o si los recursos disponibles no son idóneos o eficaces teniendo en cuenta la situación del accionante en cada caso concreto.

Por otra parte, en relación con el **requisito de inmediatez**, la acción debe ser interpuesta de manera oportuna en relación con los actos que generan la presunta vulneración.

Así entonces, para que proceda la tutela se requiere que se amenace un derecho fundamental y no exista otro medio de defensa judicial, a menos que éste no resulte idóneo o que siendo idóneo se promueva como mecanismo transitorio para evitar un perjuicio irremediable.

2. SOLUCIÓN DEL CASO

Afirma el señor **EDILBERTO BORREGO JIMÉNEZ** Identificado con cédula de ciudadanía **1.784.525**, quien actúa a través de apoderada, que la **AGENCIA**

¹ www.corteconstitucional/relatoria. Sentencia T-410 de 2009.



REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO DÉCIMO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ
- SECCIÓN SEGUNDA -
Expediente No.: 11001-33-35-010-2021-00210-00

NACIONAL DE MINERÍA, le está vulnerando su derecho fundamental de petición al no resolverle la petición que elevó vía correo electrónico el 18 de mayo de 2021, donde solicitó la ejecutoria de la Resolución No. VCT-001828 del 24 de diciembre de 2020, en el cual se hace referencia, entre otros asuntos, a que se acepta la cesión total de derechos y obligaciones, presentada por el aquí demandante, en su calidad de titular minero del contrato de cesión GH4-15461X, a favor de la sociedad COMERCIALIZADORA EL CONVENIO SAS.

Por su parte, la Agencia Nacional de Minería no se pronunció al respecto, pues ni siquiera rindió informe al presente trámite.

Planteado así el caso, a continuación, se analizará si es procedente la acción de tutela para proteger el derecho deprecado por la parte demandante; de ser procedente, establecer si la **AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA** con su actuación ha vulnerado algún derecho, y de ser así, determinar en qué sentido debe impartirse la orden a efectos de garantizar su protección.

Particularmente **en lo que refiere al derecho de petición, resulta procedente la acción de tutela como mecanismo principal para reclamar su protección**, teniendo en cuenta que está señalado como fundamental en el artículo 23 de la Constitución Política y que para efectos de obtener contestación por parte de una autoridad pública o de un particular, frente a una solicitud que no ha sido resuelta, no se cuenta con otro mecanismo judicial, excepto una demanda con el consecuente desarrollo de un dispendioso proceso discutiendo la legalidad de la implícita respuesta negativa frente al silencio de la administración, el que no resultaría eficaz en lo que respecta a dicho derecho.

Siendo procedente la acción de tutela para reclamar la protección al derecho fundamental de petición, a continuación se procederá a establecer si en el caso concreto la **AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA** vulneró dicho derecho, o en su defecto, alguno otro de la parte accionante.

En virtud del **derecho de petición**, se otorga a los ciudadanos la posibilidad de presentar solicitudes respetuosas a las autoridades y a obtener de ellas una resolución oportuna y completa sobre el particular. Como lo ha sostenido en forma reiterada la jurisprudencia constitucional, para la satisfacción de ese derecho la respuesta debe ser oportuna, debe resolver el asunto de fondo, en forma clara, precisa y de manera congruente con lo solicitado; y debe ser puesta en conocimiento del peticionario.

Las peticiones en interés particular encuentran desarrollo en el Título II de la parte primera de la Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Debe tenerse en cuenta que el 30 de junio de 2015, fue sancionada con efectos a partir de esa fecha, la Ley 1755 “Por medio de la cual se regula el derecho fundamental de petición y se sustituye un título del Código de Procedimiento



REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO DÉCIMO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ
- SECCIÓN SEGUNDA -
Expediente No.: 11001-33-35-010-2021-00210-00

Administrativo y de lo Contencioso Administrativo”, norma que en todo caso continúa preceptuando un término de quince (15) días para resolver las peticiones en general, de diez (10) días para peticiones de documentos e información y, treinta (30) días para resolver peticiones sobre consultas elevadas a las autoridades en relación con las materias a su cargo; en el evento de que no les sea posible resolver o contestar dentro de ese plazo, la misma norma impone a las autoridades la obligación de informarlo al interesado, “...expresando los motivos de la demora y señalando a la vez el plazo razonable en que se resolverá o dará respuesta, el cual **no podrá** exceder del doble del inicialmente previsto.”

Aunado a lo anterior, debido a la emergencia de salubridad actual presentada por el COVID -19, la Presidencia de la República expidió el Decreto 417 del 17 de marzo de 2020, Por el cual se declara un Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el Territorio Nacional y; posteriormente, libró el Decreto 491 del mismo año en curso, que en su artículo 5° establece una ampliación para atender las solicitudes de la siguiente manera:

“Artículo 5. Ampliación de términos para atender las peticiones. Para las peticiones que se encuentren en curso o que se radiquen durante la vigencia de la Emergencia Sanitaria, se ampliarán los términos señalados en el artículo 14 de la Ley 1437 de 2011, así:

Salvo norma especial toda petición deberá resolverse dentro de los treinta (30) días siguientes a su recepción.

Estará sometida a término especial la resolución de las siguientes peticiones:

(i) Las peticiones de documentos y de información deberán resolverse dentro de los veinte (20) días siguientes a su recepción.

(ii) Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en relación con las materias a su cargo deberán resolverse dentro de los treinta y cinco (35) días siguientes a su recepción.

Cuando excepcionalmente no fuere posible resolver la petición en los plazos aquí señalados, la autoridad debe informar esta circunstancia al interesado, antes del vencimiento del término señalado en el presente artículo expresando los motivos de la demora y señalando a la vez el plazo razonable en que se resolverá o dará respuesta, que no podrá exceder del doble del inicialmente previsto en este artículo.

En los demás aspectos se aplicará lo dispuesto en la Ley 1437 de 2011.

Parágrafo. La presente disposición no aplica a las peticiones relativas a la efectividad de otros derechos fundamentales”.

La forma como debe efectuarse la notificación de los actos administrativos de carácter particular y concreto está regulada por los artículos 67 a 73 de la Ley 1437 de 2011, que establecen: i) el deber de la notificación personal al interesado, a su representante o apoderado, o a la persona debidamente autorizada; ii) la entrega de copia íntegra, auténtica y gratuita del acto, con anotación de la fecha y la hora, los recursos que legalmente proceden, las autoridades ante quienes deben interponerse y los plazos para hacerlo; iii) las modalidades mediante las cuales se



REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO DÉCIMO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ
- SECCIÓN SEGUNDA -
Expediente No.: 11001-33-35-010-2021-00210-00

puede efectuar la notificación personal; iv) la forma y término de la citación para la notificación personal; v) forma y término de la notificación por aviso cuando no puede hacerse la notificación personal al cabo de los cinco (5) días del envío de la citación; vi) notificación de los actos de inscripción o registro; vii) formalidades para autorizar la recepción de la notificación; viii) efectos de la falta o irregularidad de las notificaciones y la notificación por conducta concluyente; y ix) la publicidad o notificación a terceros de quienes se desconozca su domicilio.

En relación con la importancia y las solemnidades del proceso de notificación, la misma Corte en Sentencia T-404 de 26 de junio de 2014, indicó:

“Adquiere especial relevancia resaltar que, no solo debe surtirse el trámite propio de la notificación, sino también que la misma debe realizarse en debida forma y de acuerdo a las formalidades expresamente instituidas por el legislador para ello. En ese sentido, la jurisprudencia constitucional ha explicado que el debido y oportuno conocimiento de las actuaciones de la administración es un principio rector del derecho administrativo, en virtud del cual las autoridades están en la obligación de poner en conocimiento de los destinatarios los actos administrativos que profieran.

Esta actividad no puede ser desarrollada de manera discrecional, sino que se trata de un acto reglado en su totalidad[26]. Es así, como cualquier mecanismo procesal que impida ejercer el derecho de defensa, todo aquello que evite, limite o confunda a una persona para ejercer en debida forma sus derechos dentro de un trámite administrativo, atenta contra el ordenamiento superior y las garantías judiciales[27]”.

De lo anterior se desprende, que el derecho de petición conlleva la obligación por parte de las autoridades de dar una pronta resolución, de responder de fondo y de notificar la respuesta al interesado.

Es necesario anotar, que la obligación de dar una respuesta no supone el compromiso de resolver en un determinado sentido la petición, es decir, a favor o en contra de la solicitud del peticionario, sino tan solo la exigencia de contestar la solicitud presentada por el ciudadano de manera clara, completa y oportuna.

Volviendo al caso que nos ocupa, se advierte que, si bien dentro del plenario no obra soporte alguno que permita determinar que la petición que la parte actora asegura haber elevado ante la Agencia Nacional de Minería haya sido presentada el 18 de mayo de 2021, teniendo en cuenta que la entidad accionada no allegó contestación alguna al presente trámite y, en tal sentido, no desvirtuó lo señalado por la parte accionante; el Juzgado tendrá por cierta dicha afirmación. Lo anterior, durante el desarrollo de la acción de tutela en curso y para todos los efectos a que haya lugar.

Así entonces, se tiene que, en la petición en controversia fue solicitada la ejecutoria de la Resolución No. VCT-001828 del 24 de diciembre de 2020 con relación al expediente GH4-15461X, y que se haga la inscripción de una cesión en el Registro Minero Nacional.



REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO DÉCIMO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ
- SECCIÓN SEGUNDA -
Expediente No.: 11001-33-35-010-2021-00210-00

De otro lado, dentro del expediente no hay elementos de juicio que permitan concluir que la petición haya sido resuelta de fondo, pues, además como se indicó anteriormente la accionada ni siquiera rindió informe alguno al presente trámite.

Así las cosas, dado que ha transcurrido más de los quince (15) días que se tienen establecidos para resolver este tipo de peticiones, término que fue modificado con ocasión a la emergencia sanitaria declarada en el país a través del Decreto 491 del 28 de marzo de 2020, el cual dispuso en el inciso segundo de su artículo 5° que “*Salvo norma especial toda petición deberá resolverse **dentro de los treinta (30) días siguientes a su recepción***”, desde que se presentó la petición elevada por la parte actora el 18 de mayo de 2021, sin que ésta haya sido resuelta de fondo, se observa una vulneración al derecho consagrado en el artículo 23 de la Constitución Política.

Por lo anterior, considera el Despacho necesario conceder el amparo deprecado al derecho de petición; en consecuencia, se ordenará al Representante Legal de la **AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA** o quien haga sus veces, que dentro del término improrrogable de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta providencia, a través de la dependencia que corresponda, proceda a resolver de manera clara, precisa y de fondo, la petición elevada por la parte actora señalada en precedencia, donde solicitó la ejecutoria de la Resolución No. VCT-001828 del 24 de diciembre de 2020 con relación al expediente GH4-15461X, y que se haga la inscripción de una cesión en el Registro Minero Nacional; notificándole la respuesta en debida forma acorde con la normativa que se tiene establecida para ello, en el correo electrónico aportado al plenario, éste es sandra@castiblancosas.com.

Debe tenerse en cuenta que la obligación de dar una respuesta no supone el compromiso de resolver en un determinado sentido la petición, es decir, a favor o en contra de la solicitud del peticionario.

En relación con lo solicitado por la parte demandante en el numeral 3° de las pretensiones, será negada, toda vez que lo requerido en dicho numeral es lo mismo que se procura con la petición elevada por la parte actora vía correo electrónico el 18 de mayo de 2021. En tal sentido se entiende que, al darle contestación de fondo a esta última solicitud, de contera se resuelve la pretensión de la referencia. Sumándose al hecho que la parte demandante no demostró encontrarse en alguna situación que le ocasione perjuicio irremediable alguno, acorde como lo ha sostenido en reiterada jurisprudencia la Corte Constitucional.

En mérito de lo expuesto, el Juzgado Décimo Administrativo Oral del Circuito Judicial de Bogotá, Sección Segunda, administrando justicia en nombre de la República de Colombia y por autoridad de la ley,

FALLA:



REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO DÉCIMO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO JUDICIAL DE BOGOTÁ
- SECCIÓN SEGUNDA -
Expediente No.: 11001-33-35-010-2021-00210-00

PRIMERO.- CONCEDER el amparo para el derecho fundamental de petición invocado por **EDILBERTO BORREGO JIMÉNEZ** identificado con cédula de ciudadanía **1.784.525**, quien actúa a través de apoderada, como vulnerado por la **AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA**; acorde con lo expuesto en la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO.- En consecuencia, se **ORDENA** al Representante Legal de la **AGENCIA NACIONAL DE MINERÍA** o quien haga sus veces, que dentro del término improrrogable de las cuarenta y ocho (48) horas siguientes a la notificación de esta providencia, a través de la dependencia que corresponda, proceda a resolver de manera clara, precisa y de fondo, la petición elevada por la parte actora el 18 de mayo del 2021 vía correo electrónico, donde solicitó la ejecutoria de la Resolución No. VCT-001828 del 24 de diciembre de 2020 con relación al expediente GH4-15461X, y que se haga la inscripción de una cesión en el Registro Minero Nacional; notificándole la respuesta en debida forma acorde con la normativa que se tiene establecida para ello, en el correo electrónico aportado al plenario, éste es sandra@castiblanco.com.

Debe tenerse en cuenta que la obligación de dar una respuesta no supone el compromiso de resolver en un determinado sentido la petición, es decir, a favor o en contra de la solicitud del peticionario.

TERCERO.- Negar las demás pretensiones.

CUARTO.- NOTIFICAR a los interesados por el medio más expedito la determinación adoptada en este fallo, en cumplimiento de lo previsto en el artículo 30 del Decreto 2591 de 1991.

QUINTO.- Si este fallo no fuere impugnado, remítase a la Corte Constitucional para su eventual revisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

JOSÉ VICENTE CIFUENTES SALAZAR
JUEZ

JGR